

Lo que está en juego en las próximas elecciones

Deslinde

En vísperas de la iniciación de la campaña electoral, la situación política nacional es sumamente compleja. No se sabe el futuro de la reelección, la cual en caso de aprobarse facilitaría la continuidad del uribismo en el gobierno. Sin embargo, la continuidad de sus políticas fundamentales, ligadas a la prolongación de las orientaciones neoliberales, y que es lo que en últimas interesa a Estados Unidos, estaría garantizada también con otros candidatos. La izquierda, por su parte, hace un esfuerzo unitario que, en caso de materializarse, la colocaría como una importante corriente en capacidad de movilizar amplios sectores.

Deslinde

Reforma política y reelección

El 12 de marzo y el 28 de mayo de 2006 habrá elecciones parlamentarias y presidenciales en Colombia. Dichos comicios tienen en ascuas a la nación entera, por cuanto perfilarán el nuevo mapa político que regirá a partir de entonces, al aplicarse por primera vez la reforma política (Acto Legislativo No. 1 de 2003) y posiblemente la reelección presidencial (Acto Legislativo No. 2 de 2004). Asuntos ambos que entrañan gran incertidumbre.

El primero, porque definirá cuáles partidos y movimientos políticos sobreviven a la poda que en la rama legislativa ocasionará la nueva normatividad electoral, la cual dispone que para tener derecho a alguna curul debe alcanzarse un umbral de por lo menos el 2% del total de la votación para el Senado o el 50% del cuociente en cada departamento para la Cámara de Representantes. Por ejemplo, en los comicios de marzo de 2002 únicamente tres listas (las encabezadas por Luis Alfredo Ramos, Antonio Navarro Wolf y Germán Vargas Lleras) superaron en el Senado el umbral que entonces habría regido, de haber existido el Acto Legislativo que se aprobó al siguiente año; las demás no hubieran tenido derecho a elegir ningún senador. En consecuencia, se calcula que del racimo de seis decenas de partidos y movimientos que actualmente gozan de personería jurídica, sólo la conservarán alrededor de diez. Ello sin detenernos en las implicaciones que tendrán otros aspectos antidemocráticos de la reforma política, como la cifra repartidora, la financiación de los partidos y de las campañas electorales, la lista única, las bancadas parlamentarias, etc.

En cuanto a la reelección, todavía está pendiente el fallo de la Corte Constitucional; sus magistrados han afirmado que se esforzarán por emitir la sentencia en septiembre, pero legalmente tienen plazo hasta noviembre. No se sabe si el alto tribunal acogerá los conceptos emitidos por el procurador Edgardo Maya o los argumentos de algunas de las 19 demandas que contra la reelección reposan en sus anaqueles o si, por el contrario, le dará vía libre, repitiendo así los antecedentes de sumisión frente a las presiones del Ejecutivo, como ocurrió con la Corte Suprema de Justicia en el caso de la reforma de la Carta Magna por parte de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Lo cierto es que, de imponerse la reelección, los comicios presidenciales de mayo próximo adolecerían de unas condiciones claramente inequitativas –además de las ya vigentes contra las minorías políticas– que ponen en desventaja a los demás candidatos frente a los ímpetus bonapartistas de Uribe Vélez. Aunque la denominada Ley de Garantías Electorales pretende ocultar el evidente favoritismo de que goza el candidato-presidente –reconocido por la misma Procuraduría General de la Nación, que por ello solicitó a la Corte Constitucional declarar la inexecutable de la norma–, tales garantías se reducirían a discutir si el "método más adecuado para la pena de muerte es la inyección letal o la silla eléctrica a pesar de estar absolutamente en desacuerdo con que el Estado, mediante una orden judicial o el medio que sea, disponga de la vida humana", como dijera el doctor Carlos Gaviria, candidato

presidencial de Alternativa Democrática, al explicar por medio de este símil su desacuerdo con dicha ley y con la reelección presidencial.

¿Cuál es la posición y cuáles las perspectivas de los diferentes sectores políticos frente a un futuro tan incierto?

Prolongando el actual vía crucis de la Nación

El Partido Liberal no ha definido su candidato presidencial y tampoco las listas que participarán con su nombre en las elecciones parlamentarias. En cuanto a lo primero, el congreso de dicha bandería –celebrado hacia mediados de junio del presente año– acordó una consulta interna para escoger su candidato, mas no definió su fecha, delegando la determinación en los precandidatos y en el jefe único del partido. Ello suscitó un profundo desacuerdo entre los nominados, el cual a la postre desembocó en que Enrique Peñalosa, quien se había reintegrado a las filas partidarias en dicho congreso, volviera a retirarse del liberalismo en la noche del 8 de agosto y anunciara que postulará su candidatura independientemente, en razón de que –según él– no le respetaron la fecha del 12 de marzo del 2006 que había exigido para la consulta, cosa que quedó desmentida puesto que a la semana siguiente César Gaviria fijó esa fecha. Así las cosas, hasta hoy la baraja liberal la componen Horacio Serpa, Cecilia López, Rodrigo Rivera, Rafael Pardo y Andrés González. Si la Corte Constitucional aprueba la reelección, también habría la posibilidad de que Gaviria Trujillo sea candidato. Y tanto éste como Uribe Vélez serían los preferidos por Washington.

Gaviria se reencauchó ante gran parte de los asistentes al congreso liberal. Incluso muchos serpistas, sorprendidos, escucharon a su jefe confesar que el ex presidente lo había dejado sin discurso. Éste aprovechó su alocución para lanzar dardos de variado calibre contra Uribe, entre los cuales reseñamos: "Aunque el presidente no lo crea, la historia no comenzó ni va a terminar con él... Su lenguaje agresivo y pendenciero sólo conduce a la polarización que él busca. (...) La política social... se ha convertido durante este gobierno en un instrumento asistencialista, por medio del cual el caudillo hace favores, reparte cheques, regala becas y ordena que se pongan vacunas a los niños, claro, siempre y cuando haya una cámara de televisión que lo registre. (...) La política de seguridad democrática no ha dado respuesta eficaz a la inseguridad urbana... En cuanto al proceso de paz con los llamados paramilitares, fui y soy su partidario... Sin embargo, no considero que esté bien llevado, ni que necesariamente vaya a traer la paz. Tampoco creo que vaya a provocar el desmantelamiento del fenómeno paramilitar... Lo que parece evidente es que el proyecto [de Justicia y Paz] que el Gobierno ha impulsado, apoyado y defendido no satisface niveles de aplicación de justicia ni de reparación a las víctimas. Tampoco lo hace frente al esclarecimiento de los hechos ni el desmonte de los aparatos criminales... El procedimiento judicial... sin duda conduce al total perdón y a la absoluta impunidad. (...) No entendí la insistencia del Gobierno en darles un estatus político a estos grupos. Tampoco comprendo la propuesta simultánea de eliminar el delito político de la Constitución. (...) [Uribe] ha apuntalado su gobierno en alianzas con grupos reaccionarios... El brusco giro del presidente a la derecha nos recuerda el tránsito de Rafael Núñez, de sobresaliente jefe radical a caudillo de la Regeneración y aliado incondicional de los grupos conservadores. Pero, a diferencia de Núñez, nuestro autodenominado Regenerador ha decidido perpetuarse en el poder, y utiliza para ello todos los recursos, todas las políticas y todos los instrumentos de proselitismo que encuentra en el aparato estatal. (...) Lo más inquietante es el regreso de la intervención de los funcionarios en política, lo cual evidencia el principal desafío para el proceso electoral. Sobre todo, porque no se ha diseñado un mecanismo para evitar el uso de los recursos estatales en la campaña, es decir, para propósitos ajenos a las necesidades públicas, lo que sin duda se puede convertir en una conducta que linda con la corrupción y el apropiamiento indebido de tales bienes."

Mas descontando las anteriores críticas, en buena medida motivadas por su deseo de sacarse el clavo frente a las acusaciones que contra su gobierno lanzó Uribe, a quien Gaviria había apoyado mientras que fungió

como secretario general de la OEA, ¿cuál fue en esencia la propuesta económica formulada en su alocución por quien fuera proclamado jefe único del liberalismo? Reafirmar la apertura económica neoliberal. En efecto, escudriñando en el sibilino discurso gavirista del 10 de junio, en que tanto insiste en la socialdemocracia, descuella la interpretación que de ella hace y la cual se resume en persistir en la misma política aperturista por él aplicada durante su gobierno y continuada por las administraciones sucesivas, así como su propósito de avanzar en las nuevas reformas que dicho modelo requiera: "Los esfuerzos de los noventa hay que complementarlos, profundizarlos y rectificarlos ahora que el país necesita nuevas reformas... Tenemos que hacerle frente a la globalización sin ánimo derrotista, tratando de gobernar sobre ella". Reconociendo –con lo que vuelve a hacer gala de su inveterada postración ante las imposiciones trazadas por las entidades financieras internacionales– que resultaría deseable mitigar (¡vana y contradictoria demagogia!) la debacle social causada por esas mismas políticas, a riesgo de que estalle una conflagración social: "Personalmente creo que ni el anterior ni el nuevo [modelo económico] han servido para eliminar la pobreza y la marginalidad. Abandonar de súbito estos esquemas, como ya lo he expresado, es una táctica riesgosa en un mundo tan competitivo e interdependiente como en el que vivimos... Este panorama sólo deja en claro que es imperativo que le demos un rol central a la política social en nuestro desarrollo, asunto en el cual no fueron particularmente afortunados ni el anterior modelo económico ni el que se ha desarrollado a partir de los años ochenta."

Pero estos postulados de ninguna manera pueden endilgarse exclusivamente a Gaviria; al aceptar los anteriores asertos –y también con sus acciones cuando fueron funcionarios gubernamentales, asunto éste que escapa al ámbito del presente artículo, Serpa y los demás precandidatos liberales se alindaron alrededor de lo dicho por el jefe de su partido, refrendando de hecho (aunque en otras declaraciones pretendan desvirtuarlo) los postulados neoliberales que el pereirano representa mejor que nadie.

En lo atinente a las listas parlamentarias, en el conjunto de los sectores políticos todavía impera la indefinición. Frente al peligro de quedar borrados del mapa electoral a causa de la lista única y del umbral, y ante unas alianzas que en algunos casos todavía se encuentran en proceso de fragua, sólo hasta que quede finiquitada la inscripción de listas se sabrá a ciencia cierta en cuáles incluirán sus nombres los candidatos al Parlamento. Aunque con la opción tomada por Gaviria de hacer la consulta liberal en las elecciones de marzo próximo, se fortalecen las listas liberales y se consolida en ellas a los actuales congresistas de ese partido. Cabiendo resaltar la valerosa –aunque ambigua– posición de Piedad Córdoba, quien por un lado manifestó que se marginaba de las listas liberales y lanzó un grito de rebeldía contra el partido que por enésima vez se ratificó en sus propuestas aperturistas, pero por el otro acompaña al candidato Serpa, quien –como ya explicamos–, pese a su perorata socialdemócrata, aprobó las directrices ideológicas de Gaviria en el congreso liberal y hasta hace poco formó parte de la administración Uribe y también del gobierno ‘aperturista con corazón’ de Ernesto Samper.

A su vez, y aunque formalmente no hace parte de los dos partidos tradicionales, Antanas Mockus también está alindado y ha sido partícipe de las mismas políticas que el país ha padecido en la última década y media. Como él mismo lo expresara en artículo de El Tiempo de agosto 1, 2005: "Soy un buen continuista... Nada me impide ofrecer un mejoramiento de lo que usted [Uribe] hace... Yo fui buen continuista en dos ocasiones: con Jaime Castro y con Enrique Peñalosa. Ahora el costo de ser ‘discontinuista’ puede ser muy alto." O como lo ratificara en entrevista que concediera a la revista Cambio de agosto 8-15: "Pienso que es realista planear el próximo gobierno como uno que prolongue muchas cosas que éste hizo y complementa las que haya que complementar."

Por su parte, en el uribismo las cosas se resumen en una palabra: reelección. Y en ello podemos incluir al conservatismo que, frente a una debilidad extrema que lo ha tenido a punto de desaparecer y dada su proclividad ideológica con el presidente de la república, ha optado por convertirse en mero apéndice del uribismo. Según lo comentado a El Nuevo Siglo del 3 de agosto por dirigentes cercanos al presidente del

Directorio Nacional Conservador, Carlos Holguín Sardi, éste repostó a quienes afirman que lo que se observa es que el conservatismo no quiere llegar al poder y se acomoda a las circunstancias que, en su concepto, el Partido Conservador no puede ser una alternativa de poder porque ya está en el poder. Empero, el reacercamiento de Pastrana al primer mandatario le ha dado nuevos aires a la reunificación de los conservadores. Más aún, si la Corte Constitucional entierra la reelección, excluyendo así institucionalmente la candidatura de Uribe –y decimos institucionalmente, puesto que si el alto tribunal se pronuncia en tal sentido, no se puede excluir incluso un golpe de Estado–, ello impelería a los conservadores a presentar su propio candidato presidencial.

Para acallar hasta las pocas voces conservadoras disidentes que antaño subsistían por mero inconformismo con su partida burocrática, Uribe no vacila en seguir recurriendo a repartir cargos diplomáticos y de otra índole, en lo que los analistas tradicionales catalogan como ‘genial’ jugada política, pero que tan sólo constituye otro ejemplo de los más vulgares vicios politiqueros tan criticados pero tan aplicados por el presidente. Tal el caso del nombramiento de Andrés Pastrana a la embajada en Washington, que repite muchos otros, como el de Horacio Serpa en la OEA y el más reciente del periodista Roberto García Peña, D’Artagnan, quien rechazó la embajada en Canadá. A contrapelo de lo afirmado por Pastrana de que "ni el Presidente compró mi conciencia, ni yo le vendí mis principios", sólo de eso se trata: de vender los principios, si es que alguna vez existieron. No de otra forma puede entenderse que, en aras a aceptar su designación, el ex presidente arroje al cuarto de San Alejo anteriores acusaciones suyas del siguiente tenor: "Tampoco es sano para una democracia que un gobernante esté comprando conciencias para aprobar la reelección." "La pregunta es si es lícito negociar con tal poder electoral [el que representan los paramilitares] mientras la cabeza negociadora está en trance electoral. Si aquí hay una simple interferencia o una flagrante incompatibilidad. Si aquí se pueden dar garantías." (El Tiempo. Agosto 2, página 1-2) Con ello Pastrana reconoce un agravante que fortalece la parcialidad a favor del jefe del Ejecutivo y que ensombrecerá las próximas elecciones presidenciales: se trata de continuar con la misma pócima pero administrándola a la brava, apuntalada por las más tenebrosas fuerzas paramilitares que de hecho coaccionarán el voto ciudadano, como ejército electoral del presidente-candidato.

Las supuestas preferencias de que goza el actual primer mandatario en las elecciones de mayo del 2006 encuentran su pivote en la política de paz que éste ha adelantado, a pesar de no haber logrado su cometido pacificador. Por un lado, aunque la embestida militarista de Uribe las ha obligado a replegarse, las FARC se hallan lejos de estar aniquiladas y continúan perpetrando a diestra y siniestra ataques guerrilleros en espera de mejores momentos para arreciar su ofensiva. Por el otro, los grupos paramilitares mantienen su control sobre porciones enteras del territorio nacional, blandiendo el terror y escudados tras la impunidad. Como bien lo dijera el senador Jorge Enrique Robledo, al sustentar su voto negativo a la ley de ‘Justicia y Paz’: "¡Ojalá haya paz! Por razones obvias. Si algo requiere con urgencia nuestro país es que cesen el asesinato, el secuestro, la extorsión, el homicidio... Y que se dé una solución política a los distintos conflictos existentes en este sentido en Colombia... Que el Estado colombiano encuentre, con los distintos actores que se hallan enfrentados con las armas, un proceso de paz y una solución política... [Pero] no vemos que éste sea un proyecto que conduzca efectivamente a la paz y a la desmovilización... Porque el problema no es que se entreguen unos cuantos hombres y unas cuantas armas frente a las pantallas de la televisión, sino que efectivamente esas organizaciones se desmovilicen, en el sentido de que no puedan ejercer un poder intimidatorio en contra de quienes no utilizamos la violencia para resolver las contradicciones políticas... Este criterio de que la desmovilización debe ser efectiva tendrá que aplicársele a cualquier otra organización armada [o sea a la guerrilla] que se desmovilice".

Avances en el proceso unitario de la izquierda

El otro extremo del espectro electoral lo constituye la izquierda, que prosigue su esfuerzo por estructurar un frente unitario entre Alternativa Democrática (AD) y el Polo Democrático Independiente (PDI). No es un

frente cualquiera, puesto que engloba –además de las huestes del PDI– una numerosa pléyade de movimientos y partidos que integran AD: el Frente Social y Político, el MOIR, la Unidad Democrática, el Movimiento Ciudadano, el Partido Comunitario Opción Siete y las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO). De acuerdo con la carta remitida al PDI el 14 de febrero de 2005 por el candidato de Alternativa Democrática, Carlos Gaviria, se trata de un esfuerzo por lograr una unidad integral entre las dos fuerzas: "Como pueden ustedes apreciar, lo que les proponemos es una unidad total, que para ser sólida y estable requiere un diálogo cuidadoso sobre cada uno de los ítems". Gaviria Díaz se refiere a los cuatro puntos propuestos por AD y que, de aprobarlos el PDI, fraguarían una sólida alianza, diametralmente opuesta al continuismo planteado por sus contrincantes uribistas, liberales y conservadores: unidad programática, normas básicas y democráticas de funcionamiento, selección de un candidato presidencial único y conformación de listas únicas.

En su congreso del 2 al 4 de junio, el PDI aprobó por unanimidad proseguir el proceso unitario con AD. Ésta –a su vez– realizó su Congreso Nacional de Unidad el 19 y 20 de agosto, incluyendo dentro de sus objetivos el "aportar a la unidad de las fuerzas políticas y sociales democráticas y de la izquierda" y destacando la consigna de lograr una unidad "sin sectarismo y sin ambigüedades". El PDI nominó a Antonio Navarro Wolf como su candidato presidencial, proponiendo que se escoja la balota unitaria entre él y Carlos Gaviria en una consulta. Por su parte, AD defiende que el candidato de unidad se defina por consenso, aduciendo que la consulta tiene el inconveniente de que tan importante asunto podrían entrar a definirlo votantes de otras organizaciones –como ocurriera en el malhadado año de 1990, cuando César Gaviria resultara ganador en la consulta liberal–, que definir el candidato por consenso resulta menos desgastante y menos costoso, y porque ello evitaría una posible confrontación alrededor de este punto entre los dos grupos sin dejar vencedores ni vencidos, escogencia que en todo caso se haría "sopesando cuál nombre y qué propuestas brindan más garantías para el avance del proceso unitario y el fortalecimiento de las corrientes democráticas en Colombia" (Carta de AD al PDI de agosto 29, 2005).

Mientras tanto numerosos sectores profesionales, académicos, sindicales e incluso del mismo PDI miran con especial simpatía la candidatura de Carlos Gaviria, resaltando sus cualidades intelectuales, sus impolutos antecedentes como presidente de la Corte Constitucional, su desempeño en el Senado defendiendo los intereses de los trabajadores y de todo el país, y el arraigo que su seriedad y consecuencia políticas genera en múltiples y disímiles esferas que conforman el más amplio espectro nacional.

Sobre las elecciones parlamentarias, ambos grupos se inclinan por una lista única con voto preferente y en cuanto a unidad organizativa se estudia conformar una organización federada. En su carta del 29 de agosto AD precisa su propuesta sobre estos dos puntos así:

"El proceso de unidad organizativa se hará a partir de la personería jurídica del Polo Democrático Independiente (PDI) y mediante modificaciones en sus estatutos... En esa reforma estatutaria se consagrará que dicha organización cambiará su nombre por el de Polo Alternativo (PA) y se orientará por el programa político que estamos por acordar, en el entendido de que no se trata de una unidad meramente electoral. Es obvio que en el proceso de unificarnos desaparecerán las personerías jurídicas [tanto de los grupos que integran AD como también la del PDI]... pues estos se integrarán al Polo Alternativo (PA), donde, ustedes y nosotros, acataremos su programa, estatutos y decisiones.

Además, acogemos la idea de ustedes de darle al proyecto de unidad –en nuestra propuesta con el nombre de Polo Alternativo (PA)– unos estatutos que dividan este proceso en dos períodos: el primero, con una forma organizativa transitoria que empezará a partir del momento de suscripción y legalización del acuerdo unitario y en la que regirán normas de carácter provisional hasta que realicemos el Congreso de Unidad antes de terminar el año 2006. Y el segundo, con una forma organizativa permanente que regirá a partir de dicho Congreso de Unidad.

Durante el período de transición (desde el momento del acuerdo unitario hasta el Congreso de Unidad) la dirección nacional del Polo Alternativo (PA) se conformará de manera paritaria (y con un número a acordar) por miembros de los actuales Polo Democrático Independiente (PDI) y Alternativa Democrática (AD), seleccionados por cada una de las organizaciones. Esa dirección nacional o Mesa de Unidad (que es el nombre que ustedes han propuesto) estará definida en los estatutos y se inscribirá ante el Consejo Nacional Electoral como el máximo organismo de dirección del Polo Alternativo (PA)... Entre las atribuciones de la Mesa de Unidad estará el nombramiento del representante legal, y la definición de sus respectivos poderes y funciones, así como la conformación de las listas únicas a la Cámara y el Senado...

(...) El Congreso de Unidad del año 2006 se hará de acuerdo con los estatutos del Polo Alternativo (PA) y con las normas que expida la Mesa de Unidad, reglas que, en todo caso, definirán sistemas democráticos de elección de los delegados y de los diferentes organismos de dirección que orientarán al Polo Alternativo (PA) a partir de ese momento. También debe establecerse que las puertas del Polo Alternativo (PA) estarán abiertas para otros sectores políticos que deseen acrecentar el torrente de unidad de la izquierda democrática colombiana...

Somos conscientes de que nuestra propuesta es ambiciosa, pues apunta a lograr la unidad de la izquierda democrática en Colombia. Pero la hora así lo reclama... Consideramos que es nuestro deber –de ustedes y de nosotros– esforzarnos por estar a la altura de las circunstancias."

El programa mutuamente aprobado, para el cual AD presentó como marco las Bases Programáticas de Alternativa Democrática, serviría para delinear un plan de gobierno democrático y nacionalista, diametralmente contrapuesto a los que hasta ahora han regido la historia de Colombia e incluiría asuntos –a guisa de ejemplo– como defender la soberanía nacional frente a todo tipo de dominación extranjera, en especial la estadounidense; rechazar la globalización neoliberal materializada en Tratados de Libre Comercio (TLC) como el que se negocia con EEUU y en las imposiciones de las instituciones financieras internacionales; mantener relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países, en pie de igualdad, respeto mutuo y beneficio recíproco; condenar la política unilateral del presidente George W. Bush y su estrategia de ‘Guerra Preventiva’; suspender el Plan Colombia, desmontar las bases militares estadounidenses asentadas en nuestro territorio y exigir la salida de tropas extranjeras y mercenarias; aumentar los salarios, garantizando la elevación de su capacidad adquisitiva, e instituir un sistema de control real de precios; aprobar una reforma laboral que restituya los derechos, tanto individuales como colectivos, conculcados a los trabajadores; reformar integralmente el régimen de servicios públicos domiciliarios, echando para atrás su privatización y upaquización; derogar la Ley 100 de 1993, rechazar las privatizaciones y eliminar los fondos privados de pensiones y la intermediación del capital financiero en la prestación de servicios de salud; e impartir una educación pública universal, gratuita, de calidad y obligatoria en todos los niveles.

Favorables perspectivas de cambio

Faltando aún por definir si prospera la reelección y qué acontecimientos políticos se producen en caso de no serlo, quiénes son escogidos definitivamente como candidatos presidenciales de los distintos partidos, si la carrera presidencial se define en la primera o segunda vuelta, qué contrincantes se enfrentarán en caso de darse la última y cómo y a nombre de qué partidos se conforman las listas para el Parlamento, lo cierto es que en marzo y mayo de 2006 la ciudadanía dispondrá de dos propuestas electorales diametralmente distintas: continuar las actuales políticas y las dramáticas realidades que ellas imponen a nuestra nación, o cambiarlas de cuajo. Esperemos que, superando las desiguales condiciones en que se sucederán los comicios y desechando la imposición de uno de los candidatos –Álvaro Uribe Vélez– así como de los demás que integran las toldas de quienes en caso de que la Corte Constitucional tumba la reelección de todas maneras, como ya explicamos, se empeñan en prolongar la continuidad neoliberal, el pueblo colombiano sepa escoger

la alternativa que pugne por liberarlo de la dominación estadounidense, sienta las bases para el progreso que hasta ahora le ha sido tan esquivo, abra las puertas a un bienestar del cual nunca ha disfrutado e irrumpa contra las talanqueras que impiden el pleno goce de sus derechos democráticos.

Así lo auguran las favorables perspectivas de unidad en la izquierda, el inconformismo de múltiples y muy diversos sectores contra políticas como el TLC que arruinan las precarias bases de nuestro desarrollo, y las diversas luchas libradas por los trabajadores y que ahora se remozarán con el anunciado Paro Nacional del 12 de octubre en rechazo a la reelección, el TLC y las políticas gubernamentales y en defensa de los intereses de la Nación y de sus ciudadanos.

DESLINDE
Revista del Centro de Estudios del Trabajo
Cedetrabajo